

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN

FLOREAL GORINI

ANUARIO DE INVESTIGACIONES

AÑO 2019

DEPARTAMENTO/ÁREA: ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS

AUTOR/A: DOBRUSKIN, LAURA LUNA; DÍAS, MARÍA EUGENIA;
MONTES, VERA GABRIELA

TITULO DEL TRABAJO: APROXIMACIÓN A LOS
REPERTORIOS DE ACCIÓN DE UN NUEVO ACTOR
COLECTIVO: LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA
DURANTE LOS AÑOS DE CAMBIEMOS (2015-2019).



Publicación Anual - N° 10

ISSN: 1853-8452

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Av. Corrientes 1543 (C1042AAB) - Ciudad de Buenos Aires – [011]-5077-8000
www.centrocultural.coop

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Anuario de Investigaciones - Año 2019

Directoras/es de la publicación:

Gabriela Nacht
Marcelo Barrera
Natacha Koss
Julieta Grinspan
Pamela Brownell

Autoridades del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”

Director General: Juan Carlos Junio

Subdirector: Horacio López

Director Artístico: Juano Villafañe

Secretario de Formación e Investigaciones: Pablo Imen

Secretario de Comunicaciones: Luis Pablo Giniger

Secretaria de Planificación Institucional: Natalia Stoppani

Secretaria de Programación Artística: Antoaneta Madjarova

Secretaria de Investigaciones: Gabriela Nacht

Secretario de Ediciones: Javier Marín

© Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Av. Corrientes 1543 (C1042AAB) - Ciudad de Buenos Aires - [011]-5077-8000 -
www.centrocultural.coop

© De los autores

Todos los derechos reservados.
ISSN: 1853-8452

Aproximación a los repertorios de acción de un nuevo actor colectivo: la Unión de Trabajadores de la Tierra durante los años de Cambiemos (2015-2019).

Dobruskin, Laura Luna; Díaz María Eugenia; Montes, Vera Gabriela

Palabras clave: AGRICULTURA FAMILIAR – CORDÓN HORTÍCOLA – VERDURAZO - ACCIÓN COLECTIVA – MOVIMIENTOS SOCIALES

Resumen: En el marco de la crisis socioeconómica en que se sumergió la Argentina bajo el gobierno de la alianza Cambiemos, entre los años 2015 y 2019, emergieron actores nuevos -y no tan nuevos- que a través de distintos repertorios de acción visibilizaron en la calle y ante la opinión pública, la situación de emergencia atravesada por vastos sectores de la población. Los agricultores familiares de distintas provincias del país, con foco en el cordón hortícola del Gran La Plata, agrupados en la organización social Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), fue uno de los principales colectivos afectados.

Las acciones colectivas desarrolladas por la UTT en el escenario público durante el período, tuvieron el objetivo de central de exigir al gobierno nacional la consideración de sus reivindicaciones y la promulgación de nuevos derechos para las familias trabajadoras del sector.

El objetivo de este trabajo consiste en realizar una primera aproximación descriptiva y analítica a los repertorios de acción desarrollados entre 2015 y 2019, por la UTT, una de las organizaciones de trabajadores de la economía agrícola familiar más relevante de los últimos años en términos de masividad, relevancia política y participación en el espacio público.

—

1. Introducción

Las dos primeras décadas del siglo XXI han supuesto para América Latina y en particular para el caso de Argentina, el desarrollo de grandes movilizaciones sociales de carácter sociopolítico. “Se podría decir que el siglo se ha iniciado con una reivindicación de la política en la calle”. A través de esta modalidad de acción colectiva se han expresado diversas reivindicaciones y demandas, se ha puesto en jaque a gobiernos y regímenes políticos y se han instalado temas y problemas en la mira de la agenda de la política pública y social. Movimientos “indígenas”, “piqueteros” o “trabajadores de la tierra” se han convertido lo últimos años “actores con presencia, organización y capacidad de movilización” (Revilla Blanco, 2005: 29).

La historia de la conflictividad sindical en nuestro país se liga con la problemática del acceso a la tierra y el control del derecho al usufructo de los recursos naturales. Entre las nuevas formas de conflictividad que emergen en la Argentina, se destacan experiencias sociopolíticas de productores familiares que desafían el uso de la tierra y la construcción hegemónica del territorio (Massetti, 2010).

La problemática de la tierra, es uno de los “factores estructurales que contribuye a explicar el surgimiento y posterior evolución de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar en distintas regiones del país. Desde la década del 90 han emergido y se han consolidado expresiones y respuestas colectivas, de lucha gremial y defensa jurídica, dando lugar al surgimiento de movimientos como el MOCASE, el MOCAFOR, el MAM y MOCAJU, entre otros. Estas organizaciones poseen hoy un reconocimiento y una legitimidad que trasciende las fronteras provinciales, para instalarse en el escenario nacional.

En el marco de la crisis socioeconómica que afrontó la Argentina bajo el gobierno de la alianza Cambiemos entre los años 2015 y 2019, estos actores emergieron con más fuerza en la escena pública, visibilizando la situación de emergencia atravesada por vastos sectores de la población. Uno de los principales sectores afectados durante este periodo fue, particularmente, el de los pequeños agricultores familiares de distintas provincias del país.

Las acciones impulsadas por estas organizaciones, se convierten en un tema de interés y trascendencia, tanto para la opinión pública como para las ciencias sociales en particular, impulsando el abordaje de dimensiones “relativas a las características de la acción colectiva y la identidad”, como problemas vinculados a la transformación de la estructura social.

Este trabajo inscribe su interés en esa línea de investigación. El objetivo del mismo, consiste en realizar una primera aproximación descriptiva y analítica a los repertorios de acción desarrollados entre 2015 y 2019, por una de las organizaciones de trabajadores de la economía agrícola familiar más notoria de los últimos años en términos de masividad, relevancia política y participación en el espacio público: la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

El propósito del mismo es generar conocimiento acerca de una de las formas organizacionales alcanzadas por los productores hortícolas familiares del gran la plata y otros pequeños productores familiares del país. Se espera que tal conocimiento puede contribuir a la definición de estrategias de intervención tanto intraorganizacionales como estatales, que permitan mejorar las condiciones laborales de este sector de trabajadores.

Para dar sustento teórico a la indagación, partimos de los aportes teóricos brindados por distintos autores especializados en la temática movimentista y organizacional. Asimismo, hemos recurrido a otras fuentes secundarias de información bibliográfica y a investigaciones actuales sobre la actividad.

La metodología aplicada para llevar a cabo este trabajo es cualitativa, dado que se basa centralmente en la consulta de fuentes secundarias de información de carácter

académico, así como en la revisión de artículos periodísticos publicados en los tres principales medios gráficos de tirada nacional (Clarín, La Nación y Página 12), entre los años 2016 y 2019. De forma complementaria, se realizó una entrevista semiestructurada a un pequeño productor florihortícola miembro de la UTT, residente en la zona de El Pato (Gran La Plata) en la Provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que este trabajo se enmarca en el desarrollo de una investigación más amplia que nos encontramos llevando adelante en el espacio de investigaciones del CCC, focalizada en el estudio interdisciplinario de los movimientos sociales y la conflictividad social en Argentina, en el período 2015-2019.

2. Aproximación conceptual a los movimientos sociales y los repertorios de acción

Dado que la definición de los conceptos a los que se recurrirá a lo largo de este trabajo no resulta unívoca, sino que se trata de *constructos* utilizados para “leer” la realidad analizada, creemos necesario precisar la definición de las principales categorías utilizadas. Focalizaremos especialmente en las nociones de acción colectiva, movimientos sociales y organización social.

Como mencionamos en la Introducción, múltiples problemáticas sociales han modificado el escenario conflictivo de nuestro país en las últimas décadas haciéndolo más diverso y heterogéneo. El conflicto capital-trabajo, como sostienen distintos estudios, lejos de desaparecer luego de vastas transformaciones socioeconómicas y políticas, mantiene un lugar de primacía en el mapa conflictual de Argentina. Estas transformaciones impusieron limitaciones a la protesta sindical, contrastando con otros períodos de auge de este tipo de protestas característico hasta la década del ochenta., dando lugar a nuevos repertorios de acción enmarcados en la relación capital-trabajo, pero transversales o en contacto con otro tipo de problemáticas de la arena social (Masseti, 2010).

“La terminología de *movimientos sociales*, surge con la intención de aportar al estudio de fenómenos socio políticos no fácilmente enmarcables dentro del esquema clasista tradicional. La versatilidad teórica del término, derivada de sus orígenes académicos diversos, aportó capacidad de registrar fenómenos de politización que “desafiaron el *status quo* atravesando toda la estructura social (raza, etnia, género, ecología, derechos humanos, preferencias sexuales), dotando a las ciencias sociales de categorías flexibles capaces de describir - antes que explicar- las dinámicas confrontativas observadas en esos nuevos núcleos conflictivos” (Masseti, 2010: 21). La virtud de estas categorías creció al tiempo que menguaba la hegemonía absoluta de partidos. “Había ahora otra categoría disponible para dar cuenta de los conflictos sociales” (Masseti, 2010: 21).

En términos generales, la categoría de movimientos sociales refiere a “actores colectivos implicados en las demandas de reconocimiento por parte de los otros actores y del sistema político, así como en las luchas políticas por la demarcación del escenario político (sus participantes, e instituciones, sus programas y alcances (Alvarez, Dagnino

y Escobar, 2001). En el caso específico de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, estos suman un elemento extra: su involucramiento en la producción de una concepción alternativa de ciudadanía (Revilla Blanco, 2005). De esta forma, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en “la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado a la exclusión sociocultural, de género, étnica y económica” (Alvarez, Dagnino y Escobar, 2001: 42).

El concepto de *acción colectiva*, siguiendo a Alberto Melucci (1994), refiere a un proceso interactivo, comunicativo y negociado, en el cual los actores sociales construyen/definen su identidad colectiva común, así como las interacciones presentes y potenciales con otros actores o colectivos (sociales, políticos, etc). Esta última evaluación, es realizada a partir de la ponderación de los recursos disponibles y las oportunidades y restricciones del medio en que se insertan las organizaciones (Melucci, 1994).

En este proceso de definición de una identidad común, que sustenta el ejercicio de lo colectivo, se inscriben tres órdenes que orientan la acción: los relacionadas con los fines (el sentido que la acción tiene para el actor); los vinculados con los medios (las posibilidades y los límites de la acción) y los relacionadas con el ambiente (ámbito en el que una acción tiene lugar) (Revilla Blanco, 2005). Estas orientaciones definirán las formas organizativas que adquiera el actor colectivo, ya sea partidos políticos, organizaciones gremiales o Movimientos Sociales.

“La constitución en el proceso de la acción colectiva del actor como un partido político, como un grupo de interés o como un movimiento social es un proceso reflexivo de definición del actor, “lo que somos”; al igual que un proceso de movilización de los recursos disponibles y de definición de las estrategias de acción. En esa definición reflexiva del actor, una clave es su relación con las instituciones políticas: o se inscribe dentro de ellas o se enfrenta a ellas.”

“Si nos atenemos a esos significados políticos de la acción colectiva, lo primero por considerar es que cuando nos referimos a acción colectiva, hablamos de la solidaridad grupal como capacidad para la acción colectiva pero también y centralmente, de conflicto político (Revilla Blanco, 2005).

El análisis de Tilly (1990) en torno al tipo de conflicto planteado por la acción colectiva, distingue dos tipologías: la acción colectiva “contenciosa” y la acción colectiva institucionalizada. “La mayor parte de la acción colectiva tiene lugar dentro de las instituciones y se lleva a cabo por grupos constituidos que promueven valores e intereses ampliamente reconocidos políticamente y no exentos de conflicto” (Revilla Blanco, 2005: 32).

Contrariamente, la acción colectiva recibe el calificativo de contenciosa cuando se lleva a cabo por parte de grupos que carecen de acceso a las instituciones y que actúan promoviendo valores, creencias e intereses no aceptados o nuevos, y que se constituyen como “amenaza” para la acción de los grupos reconocidos. Tarrow (1997) suma a esta observación la siguiente definición: los movimientos sociales son la forma

organizativa de esta acción colectiva contenciosa que mantiene la interacción con sus oponentes o con las autoridades (Tarrow, 1997).

“Raúl Zibechi (2003) ha ofrecido un catálogo de lo que comparte la acción colectiva en su movilización: la territorialización, la búsqueda de autonomía, la revalorización de la cultura, el mayor protagonismo de las mujeres; la formación de una intelectualidad propia, interna, de los movimientos; su organización en red y la preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza; todo lo anterior constituye los principales rasgos comunes de esas acciones contemporáneas (Zibechi, 2003). En el segundo caso, en relación con los procesos en los que están inmersas las acciones colectivas, nos adentramos en el reconocimiento de las causas que justifican su aparición en el escenario político, entre las que centra el incremento de la “conflictividad social”. Para el autor, los factores económico-estructurales juegan un rol central para explicar el surgimiento de los movimientos sociales (Revilla Blanco, 2005).

En este trabajo utilizaremos, además, el concepto de *Organizaciones Sociales*, bajo cuya categorización es posible agrupar a las diferentes formas asociativas que reúnen en la actualidad a los pequeños productores hortícolas del país.

El de organizaciones sociales, es un concepto amplio, utilizado para categorizar aquellas instancia de asociación superadoras del interés individual a través de su expansión en un colectivo (Bártola, 2018).

Toda Organización es un actor social que como tal juega un determinado rol y lo ejerce a través de una determinada dinámica afectando al entorno que la circunda (Seibane y Ferraris, 2017). En tanto actores, las organizaciones interpelan a la sociedad de la que forman parte y sostienen con ella un intercambio permanente de incidencias y condicionamientos. En tal sentido, la función política de las organizaciones radica en el ejercicio de influencia en el ámbito público para poder transformar y lograr incluir demandas y propuestas en la agenda pública de los gobiernos (Bártola, 2018).

3. Presentación del caso específico de estudio (UTT)

a. Aproximación al trabajo agrario y la agricultura familiar en Argentina

En Argentina, el mercado de trabajo agrario se caracteriza por ser una instancia altamente diferenciada y segmentado, que varía de acuerdo con el tipo de cultivo, con el grado de avance de los desarrollos tecnológicos, con las características de las unidades agrícolas, con el destino de la producción, así como con la magnitud y perfil de la fuerza de trabajo disponible. En consecuencia, existen espacios específicos de ofertas y demandas para cada tipo de trabajo, que implican diferencias en las condiciones de empleo, en los sistemas de remuneración, en los niveles de ingreso y la duración del trabajo (Sánchez Saldaña, 2000).

Este sector se constituye como uno de los más rentables de la matriz productiva nacional al tiempo que se erige como uno de los eslabones más relegados del mercado de trabajo. Si bien existen otras actividades que presentan situaciones de alta informalidad, en pocas se da la combinación de variables de precariedad laboral como la que registra el sector agropecuario.

Los sujetos que integran este colectivo (ya sean clasificados como pequeños productores, trabajadores asalariados, campesinos o agricultores familiares), se caracterizan por disponer de una “baja dotación de recursos y por ocupar, históricamente, posiciones subordinadas en la estructura social” (Berger y Cowan Ross, 2016: 2).

La dimensión socio-territorial resulta clave para pensar los procesos de exclusión social que rigen a los trabajadores del sector. Los fenómenos de concentración de la tierra afectan a los asalariados rurales y a los pequeños productores, promoviendo procesos de desplazamiento y precariedad laboral, que en ocasiones fuerzan a las familias a complementar sus ingresos prediales con empleos estacionales en actividades agrícolas transitorias, o bien con actividades de la economía urbana (Giarracca, Gras y Barbeta, 2005; Aparicio y Benencia, 1999; Miguel Murmis, 1998). La segregación espacial no sólo afecta el cómo se vive, sino también el sistema de relaciones que se entretienen en el espacio, al fragmentar la interacción social y la conformación de espacios de sociabilidad (Kessler, 2011).

A diferencia del sector agropecuario extensivo productor de commodities, así como de otras producciones intensivas, las regiones hortícolas se caracterizan por ser zonas de producción destinadas a proveer de verduras y hortalizas frescas (productos altamente perecederos) a los habitantes de los grandes centros urbanos, alcanzando a más de 15 millones de personas. Las unidades productivas suelen ser pequeñas, dinámicas y diversificadas en función de la demanda (Ferraris y Bravo, 2014); las formas de trabajo son familiares o son arregladas informalmente mediante salario o formas de mediería. En todos los casos prima el arriendo por sobre la propiedad de la tierra.

Si bien la organización familiar persiste a lo largo del tiempo, la misma se organiza de forma heterogénea, en función de los condicionantes económicos, socioculturales y laborales. Las formas de capitalización de los agricultores familiares en la horticultura, puede clasificarse en tres grupos (Attademo, Waisman, Rispoli y Lucero, 2013): “productores que gestionan la producción (y en ocasiones la comercialización) pero no realizan tareas productivas directas; productores familiares con capacidad para contratar mano de obra y construir invernaderos; y productores pequeños escasamente capitalizados, cuya producción depende de la mano de obra familiar (Bártola, 2018). En los tres casos mencionados, la empresa familiar dispone de “tasas de retorno inferiores a las que consideraría aceptables” el sector de los agronegocios (Attademo, Waisman, Rispoli, Lucero: 2013; 14).¹

¹ El modelo de los agronegocios refiere a aquel llevado adelante por las grandes corporaciones multinacionales que controlan la producción, distribución y comercialización de alimentos a nivel mundial.

En este sentido, “los productores de la agricultura familiar se encuentran en la base socioeconómica del modelo hortícola” (Bártola, 2018). La baja posesión de capital económico dificulta de forma cíclica la capacidad de adaptación de los agricultores a las nuevas formas de producción, tecnificación y comercialización que rigen para el sector. Esto fuerza a las familias a maximizar la fuerza de trabajo (participación de todo el grupo familiar en la actividad productiva, ciclos laborales extensos, etc.) y generar estrategias de subsistencia por fuera de la unidad productiva. De esta forma, la economía familiar muchas veces es complementada con más de una ocupación en trabajos temporarios agrícolas o urbanos, tendientes a asegurar la reproducción de la vida.

Por unidad de superficie, el sector hortícola multiplica exponencialmente la mano de obra, insumos y bienes de capital requeridos por otro tipo de producciones. La mano de obra necesaria para llevar adelante la explotación hortícola, reúne a productores, peones, medieros, jornaleros, changarines y embaladores, lo que garantiza una alta demanda de trabajadores y la movilidad del mercado de trabajo a nivel local y regional (cinturón verde) (Ferraris y Bravo, 2014).

Tal característica, sumada a la distribución espacial de las unidades de producción y a la temporalidad de la misma, contraviene el principio de la desterritorialización que caracteriza a otros sectores de la economía agraria. La dinámica de trabajo posibilita los espacios de reunión y encuentro que promueven la construcción de redes colaborativas y los procesos organizativos.

La región del cinturón hortícola del Gran Buenos Aires es, especialmente en los últimos diez años, ejemplo de este fenómeno. Con la comunidad boliviana consolidada como referente del sector, el área hortícola de la provincia es la más importante del país no solo por la cantidad de establecimientos productivos que la integran (cerca de 1200) sino también por el volumen de producción (Benencia, 2012; Bártola, 2018). Allí, la presencia de “la mediería como estrategia de complementación de la mano de obra en las unidades de producción, incrementa el número de sujetos con posibilidad de organizarse” (Ferraris y Bravo, 2014: 9). La mayor parte de las organizaciones del sector se encuentran, de hecho, conformadas tanto por productores como por medieros.²

Estas prácticas de asociación en organizaciones de diversa índoles (asociaciones, cooperativas, sindicatos, etc) constituyen un nuevo escenario, trazado por estrategias colectivas tendientes a garantizar la subsistencia y la reproducción de las familias. La organización como actor social se consolida producto de acuerdos y negociaciones de los diferentes agricultores, así como de la capacidad del sector: “200.000 trabajadores de la tierra, con el 13% de las tierras cultivables son responsables de la producción de más del 60% de los alimentos que se consumen en el país” (Página/12, 8 de abril de 2018).

² Se destacan en el cinturón hortícola de la provincia de Buenos Aires los partidos de La Plata, Berazategui y Florencio Varela.

A continuación, nos adentraremos en la indagación de una de las organizaciones conformada a la luz de esta actividad, que ha protagonizado en los últimos años el escenario de movilización social en Argentina.

b. Unión de Trabajadores de la Tierra: breve semblanza de la organización.

La UTT es una organización territorial de inserción nacional cuyo origen, en el año 2011, se remonta geográficamente al cinturón hortícola La Plata-Berazategui-Florencio Varela, en el que actualmente se concentra la mayor parte de sus integrantes. Este corredor se encuentra conformado por las localidades de Abasto, El Pato, Pereyra y Las Banderitas. Los antecedentes de la organización, sin embargo, deben rastrearse en los primeros agrupamientos alcanzados por jóvenes productores de la zona, formados en la militancia territorial entre fines de la década del 90 y la crisis del año 2001.

Este colectivo agrario reúne a más de 15 mil pequeños productores familiares, un tercio de los cuales provienen del cordón frutihortícola del Gran La Plata y el sur del Gran Buenos Aires. El resto (alrededor de 5 mil productores) se distribuyen entre los partidos del conurbano norte, Mar del Plata, Bahía Blanca, y las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Río Negro, Salta, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Chubut (Página web UTT).

La mayoría de los integrantes de la UTT son migrantes bolivianos provenientes de familias agricultoras, o primera generación de argentinos. Muchos de ellos se han volcado a la producción exclusiva de verduras. Otros, se dedican también a la producción de carne porcina y flores, como es el caso de los quinteros de Florencio Varela (Página/12, 14 de septiembre de 2017). La mayoría comercializa sus productos en ferias y establecimientos cooperativos de la economía popular, tales como almacenes de ramos generales, el mercado de flores de la plata y las ferias de La Boca y Agronomía, entre otras, tanto de provincia como de Ciudad de Buenos Aires.

“La predominancia de los productores bolivianos (fenómeno destacado como “bolivianización de la horticultura en la Argentina”) comienza a dejar su impronta tanto en las estrategias de producción y comercialización, en el ordenamiento al interior de la unidad productiva (generalmente de tipo familiar), así como en organizaciones formales e informales que se irán forjando” (Bártola, 2018).

Más del 80 por ciento de los trabajadores de la agricultura familiar que integran la UTT, no son dueños de las tierras que cultivan, sino que arriendan la propiedad (Página/12, 13 de septiembre de 2017). La extensión de la tierra sobre la que trabajan las familias productoras de la zona, oscila entre las dos y cinco hectáreas. Por lo general, habitan en viviendas emplazadas en el mismo predio en que se encuentran los sembrados. Éstas suelen resultar precarias tanto en provisión de servicios como de habitabilidad (Gabrinetti y Burone, 2016). Con frecuencia son construidas por los propios agricultores.

La mayor parte de la labor se realiza de forma manual, excepto la parte de preparación de la tierra previa a la siembra, que se realiza con tractores. El resto del trabajo es manual, tanto el sembrado como todo lo que sigue en el proceso de crecimiento y cuidado de las hojas, así como en la cosecha. En la mayor parte de los casos los productores no contratan empleados, por lo que el trabajo en las fincas suele ser familiar al momento de la producción -con colaboración de mujeres e hijos/as mayores- y cooperativo al momento de la comercialización. La mayor parte de las actividades se distribuyen de forma indistinta entre varones y mujeres, con excepción de aquellas catalogadas como riesgosas (fumigación o aplicación de agroquímicos) que suelen quedar a cargo de los hombres (Gabrinetti y Burone, 2016)

En cuanto al género, en la mayoría de actividades cotidianas de trabajo no existe diferenciación entre hombres y mujeres, aunque sí frente a la exposición de los supuestos “riesgos” de las labores. Así, generalmente fumigan o aplican químicos los hombres.

Dadas las características del colectivo, la UTT se constituye y posiciona de cara a la sociedad, como una organización sectorial y gremial, abocada a representar los intereses de un sector de agricultores, desposeído de su principal medio de producción: la tierra.

Los objetivos de la organización se constituyen, por tanto, en torno a esta problemática de sus representados. De fuerte carácter gremial, los mismos se centran en impulsar el derecho de acceso a la tierra como principal reivindicación. Lo secundan el reclamo por la promulgación de legislación protectoria para el sector.

Desde su conformación en el año 2011, la organización contó con altos niveles de participación y fuerte capacidad de movilización. Hacia mediados de la década, la UTT trazó vínculos con otras organizaciones representantes de trabajadores informales, hasta integrarse a la estructura de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en el año 2015.

Sus repertorios de protesta en el período 2016-2019 (con especial énfasis en los años 2017 y 2018) contempló estrategias ligadas a la acción directa, como los “verdurazos”, “feriazos” y cortes de ruta (Bártola, 2018). Sus reclamos centrales incluyen una ley de acceso a la tierra, compras del Estado a las familias y el restablecimiento del Monotributo Social Agropecuario, derogado en 2018.³

³ El Monotributo Social Agropecuario fue creado en 2009 como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la salud a través de la obra social, contar con el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar en blanco, otorgándole un marco regulatorio y formalización al sector más relegado del campo. Se trata de un régimen que beneficia directamente a pequeños agricultores frutihortícolas (quinteros), agricultores familiares y campesinos sin tierra propia. La obra social del MSA le permitió el acceso directo al sistema de salud a 50 mil agricultores, que suman 110 mil contando a los adherentes. Sin el aporte de la cartera de Agroindustria, según las organizaciones de trabajadores de la tierra, cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 288 pesos para contar con la obra social. Para el Ministerio de Agroindustria, el desmantelamiento del sistema del MSA le implica un “ahorro” de 30 millones de pesos por mes, de acuerdo a la misma fuente. (Página/12, 14 de julio julio 2018)

c. Ejes de trabajo desarrollados por la UTT

La UTT establece una serie de pilares fundamentales que estructuran el horizonte de las acciones de la organización. Estos ejes de trabajo se organizan en las siguientes categorías: agroecología, género, tierra, derechos de los pequeños productores, consultorio jurídico y plano internacional. Destacamos de entre ellos, aquellos más sustantivos en función tanto de los intereses de esta investigación, como de sus alcances y desarrollo.

Agroecología: La UTT no surge como una organización con objetivos directamente ligados a la agroecología. Sin embargo, la experiencia acumulada por los pequeños productores identificó la utilización de insumos dependientes de paquetes tecnológicos extranjeros y sujetos a los costes internacionales, como una problemática bisagra para el desarrollo del sector. La lectura realizada desde el marco comunitario que provee la organización, permitió además, observar la nocividad de estos productos para la salud de las familias agricultoras, que son expuestas a estas tecnologías sin mayor margen de acción, bajo la imposición de un modelo productivista y extractor.

La identificación de la problemática impulsó acciones en pos de “volver” a las formas de producción que antecedieron la expansión del uso de agroquímicos, a través de la aplicación de insumos naturales.

En el año 2013, existían 5 parcelas agroecológicas en el marco de la UTT. Hoy, son alrededor de 300 hectáreas de producción hortícola agroecológica, distribuidas en distintas provincias del país, en las que trabajan más de 150 familias pioneras en la cultura de la producción libre de agroquímicos.

Estos terrenos poseen sembrados libres de la aplicación de pesticidas y plaguicidas químicos, y cuentan con “un sistema técnico, producción de insumos y circuito comercial propio”, que crece día a día (Página web UTT).

“El equipo técnico nacional que conforma el Consultorio Técnico Popular (CoTePo), integrado por técnicos de las mismas familias productoras, genera condiciones para la contención de las necesidades técnicas y de elaboración y provisión de insumos y comercialización” (Página UTT).

Género: la UTT entiende que la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y mejores condiciones de vida para los pequeños productores implica, necesariamente, construir relaciones más igualitarias entre los géneros.

Las trabajadoras que integran la UTT llevan esta discusión a todos los espacios de la organización, a fin de desnaturalizar la cuestión tanto hacia adentro como hacia afuera de los límites de las quintas. El objetivo es hacer extensiva la reivindicación al conjunto del colectivo.

Desde la Secretaría de Géneros de la organización se coordinan encuentro y talleres de promoción, formación y debate en los que se problematizan cuestiones ligadas a las desigualdades de género, derechos de la mujer, construcción de roles y asignación de

tareas en función del trabajo productivo y reproductivo, el ejercicio de la violencia física y simbólica, entre otras. Todas estas dimensiones se abordan desde un análisis atravesado por el modelo de los agronegocios y la cultura de maximización productiva.

Desde la Secretaría de Géneros se lleva adelante, además, el acompañamiento a las familias campesinas y a mujeres en situación de violencia.

Tierra: La lucha por el acceso a la tierra es una de las columnas centrales de la organización. Desde la UTT se han presentado distintos proyectos tanto al poder ejecutivo como legislativo de distintos niveles jurisdiccionales, focalizados en el acceso a créditos blando que habiliten el acceso a la tierra para los pequeños productores. Se cuentan entre estas propuestas, la creación de “Colonias Agrícolas” en tierras del Estado, la instauración de “Áreas de Reserva de Agricultura Familiar” y el proyecto de ley de “Acceso a la Tierra”.

El reclamo de fondo de la organización consiste en una “Reforma Agraria Integral”, necesaria para garantizar condiciones dignas de trabajo a los agricultores y alimentos de calidad para el conjunto de la población (Página UTT).

Internacionales: La UTT subraya los lazos culturales y experienciales en materia de organización y movilización que atraviesan la construcción política organizacional, en distintos países de la región y también más allá del continente americano. A partir de ello impulsa la construcción de alianzas estratégicas de base, que articulen demandas y reivindicaciones transnacionales, promoviendo la formación y el intercambio de saberes.

d. Cronología/periodización de las principales acciones de protesta y reivindicación llevadas adelante por la UTT

La ausencia del Estado es uno de los principales problemas que actualmente enfrenta el sector. Estas acciones son enmarcadas en un modelo específico basado en el achicamiento del andamiaje estatal, una mayor participación de capital extranjero en el país, reformas tributarias y laborales basadas, fundamentalmente, en la flexibilización laboral. Hay una política dirigida a debilitar y eliminar a los pequeños productores “ahogándolos” a través de la eliminación de subsidios, con la intencionalidad de fortalecer a aquellos que poseen grandes extensiones para consolidar el monopolio de la tierra.

Los quinteros vivieron en carne propia, casi desde el mismo momento que cambió el gobierno a fines de 2015, que llegaba “el cambio”. La nueva administración se desentendió de las políticas públicas hacia la agricultura familiar, al tiempo que se ocupaba de reducir los derechos de exportación a los cultivos de la pampa húmeda. Los precios de los insumos para la horticultura se elevaron en forma astronómica, consecuencia de una megadevaluación y tarifazos para la energía que no contemplaron compensaciones para las pequeñas unidades agrícolas. Al mismo tiempo, el precio del

alquiler de la tierra (el 90 por ciento de los quinteros no es dueño de los predios que trabaja) se elevó a la par de los rendimientos financieros y la especulación.

A partir de esta situación, la UTT comenzó a desarrollar distintas estrategias que le permitiera por un lado, reclamar al gobierno mejoras en las condiciones del desarrollo de sus trabajos y, por el otro, visibilizar al conjunto de la sociedad sobre la problemática que enfrentaba el sector. En este sentido, la UTT se convirtió en uno de los principales referentes de lucha y resistencia a las políticas implementadas durante el gobierno de Cambiemos. A continuación se busca desarrollar la génesis de este posicionamiento detallando la cronología y principales hitos que llevaron a la UTT a consolidarse como organización en las grandes ciudades.

A mediados de septiembre de 2016 la UTT se movilizó a Plaza de Mayo para regalar 20.000 kilos de verduras con la finalidad de hacer visible la crisis que atraviesa el sector de horticultores. Esta movilización contó con la presencia de vecinos, jubilados y desocupados, que asistieron a la plaza para conseguir alimentos. Esta nueva modalidad de reclamos que se comenzó a dar en los sucesivos meses y años comenzó a ser denominada “verdurazo”.

Con los “verdurazos” la UTT creó escenarios para difundir y visibilizar la situación por la que atravesaba gran parte de los trabajadores horticultores. El “verdurazo” se volvió un método de protesta frecuente de los pequeños productores. En cada oportunidad denunciaron la crisis que vive el sector, sin acceso a la tierra y que provee al mercado interno, que por los altos costos de producción y el alquiler de la tierra sólo reciben centavos del precio final que paga el consumidor en la verdulería.

Los reclamos no se circunscriben solamente alrededor de los verdurazos. La UTT también buscó entablar diálogo con los representantes del gobierno en gestión presentando al ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, un pre-proyecto de acceso a la tierra. Este proyecto contemplaba el acceso a créditos para adquirir las tierras que los trabajadores arriendan, junto con la propuesta de un programa de cooperación con el INTA para mejorar los sistemas de producción. Desde el ministerio no fueron recibidos ni obtuvieron respuesta alguna.

En oposición a la búsqueda de diálogo y consenso, en septiembre de 2017 desde el ministerio de Agricultura se tomó la decisión de modificar el programa Cambio Rural que brindaba asistencia técnica a pequeños horticultores. El Ministerio de Agroindustria publicó en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un programa que existía desde 1993 y que tenía como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales “para mejorar su situación productiva y socioeconómica”. La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de veinte años de existencia, el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción” (Página 12, 14 de Septiembre de 2017).

Desde el Ministerio, se propusieron corregir esta “desviación” a través de nuevos requisitos para acceder al programa. Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio –el Ministerio solventa una parte de los honorarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor- hay que “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. La condición dejó afuera a más del 80 por ciento de los productores

que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, que son inmigrantes, en su mayoría provenientes de Bolivia. Ante este hecho, la UTT presentó una denuncia al INADI por considerar la medida como discriminatoria, que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados. Muchos de los productores que hoy trabajan la tierra llegaron al país hace más de veinte años (Página/12, 14 de septiembre de 2017).

Sumado a este hecho, las organizaciones que agrupan a los pequeños productores, advirtieron que el Ministerio ya había recortado unos 780 cupos de Cambio Rural que asistían a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros.

Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de la pampa húmeda que tal vez tienen cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Ahora, esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”, explicó Suárez, para quien la nueva cláusula de argentinidad es un pretexto “para sacarse de encima a todo el sector hortícola (Página 12, 14 de Septiembre de 2017).

Frente al reclamo de los productores, desde el Gobierno respondieron que para paliar la exclusión de Cambio Rural, los pequeños productores podrán solicitar ser tenidos en cuenta en otro programa similar –los Grupos de Abastecimiento Local- pero que dependían del Ministerio de Desarrollo Social.

Sumado a estas medidas, el Gobierno paralizó el monotributo social agropecuario gratuito al que accedían los pequeños horticultores y que les permitía contar con obra social y jubilación. Desde la UTT sostuvieron que con esta designación el Gobierno busca “profundizar las medidas políticas destinadas a engordar al campo rico y para unos pocos”. También remarcaron que entre 2016 y 2017 “no hubo ni una sola medida política y económica” para su sector. (Página /12, 6 de noviembre de 2017)

En octubre del mismo año las protestas se volvieron a repetir en Plaza de Mayo con la realización de un “feriazo”. En esta oportunidad la UTT contó con el apoyo de prácticamente todas las organizaciones campesinas. Bajo esta nueva modalidad, no se buscó regalar los productos sino venderlos a precios de costo para concientizar sobre los valores de los alimentos y los precios a los que llegan a los consumidores. De esta forma, se puso de manifiesto cómo la comercialización directa, del productor al consumidor, abarata los precios, que de esta manera resultan populares.

La designación del presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, como ministro de Agroindustria en noviembre de 2017 representó otro hito en la trayectoria de la UTT que no tardó en demostrar su rechazo ante tal designación. Ante esta designación, la UTT sostuvo que la llegada de Etchevehere “es un claro camino hacia la profundización del agronegocio más salvaje y el desconocimiento de todo un enorme sector que produce alimentos diariamente” (Página 12, 6 de Noviembre de 2017). La designación de Etchevehere: "Clarifica aún más el campo que desea este gobierno. Un campo despoblado en manos de grandes terratenientes que producen para exportación. Excluidos quedamos quienes vivimos y producimos en la tierra los alimentos".

(Página/12, 6 de noviembre de 2017). Como respuesta, la organización de base de pequeños productores realizó varios "feriazos" y "verdurazos" en Plaza de Mayo para volver a denunciar la situación crítica que atraviesa el sector que produce las verduras que se consumen en los grandes centros urbanos.

Las acciones emprendidas por la UTT comenzaron a tener cada vez mayor visibilidad a la vez que comenzaron a realizar acciones en solidaridad con otros sectores de la sociedad también afectados por la crisis. En este sentido, a fines de diciembre de 2017, la UTT realizó un "verdurazo" en Plaza de Mayo en solidaridad con los jubilados. Cabe recordar que los días previos se había votado en el Congreso de la Nación un recorte en la reforma previsional afectando fuertemente a los jubilados. Desde la UTT sostuvieron que el aprobado ajuste de las jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo se suma la reducción de las retenciones a la exportación de la soja, un beneficio para las economías concentradas mientras se agrava la crisis de los pequeños productores (Página/12, 27 de diciembre de 2017).

A medida que los reclamos comenzaron a tener mayor adhesión por parte de la sociedad, desde la UTT comenzaron a hacer más fuertes los reclamos por el tratamiento de la ley de Acceso a la Tierra. Como parte del reclamo, a comienzos de abril de 2018 un grupo de pequeños productores de verduras entregaron a cada diputado del Congreso Nacional un bolsón de su propia cosecha. Esta acción se realizó en paralelo a una jornada de tres días de "verdurazos" en donde se planteó la demanda por la tierra y la creación del Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos.

Una de las medidas que mayor rechazo obtuvo por parte de la organización agraria fue la disolución del Monotributo Social Agropecuario (MSA). Tras mantener paralizada durante más de un año la posibilidad de inscripción de los pequeños productores al MSA, el ministerio de Agroindustria resolvió la desarticulación del régimen al deshacerse de la obligación de hacer los aportes a la obra social por los actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administración al Ministerio de Desarrollo Social como "monotributo social" a secas.

A mediados de junio, los pequeños productores agrupados en la UTT presentaron un amparo para denunciar el congelamiento del acceso al monotributo especialmente pensado para las familias productoras de bajos recursos, que vivían en la informalidad. Unos días más tarde, el 29 de junio de 2018, la cartera que conduce Luis Miguel Etchevehere redobló la apuesta y a modo de respuesta eliminó completamente el beneficio. Las autoridades pusieron un plazo de diez días para que los pequeños productores se reempadronen en el monotributo social que otorga Desarrollo Social, que sólo cubre una parte del beneficio que percibían las familias.

Al eliminar el Monotributo Social Agropecuario, la cartera de Etchevehere les cerró el acceso a un régimen de formalización a más de 200 mil pequeños productores. Ya había 50 mil inscriptos, pero desde hace un año no acepta nuevas subas. Con la eliminación del MSA, el productor deberá pagar el 25 por ciento restante del impuesto, unos 258 pesos al día de hoy, más el aporte a la obra social por cada miembro de la familia. La eliminación del MSA encabezó la lista de reclamos impulsados por la UTT pero también por la Federación Agraria (FAA).

Además de lo que significó el recorte en la economía de la agricultura familiar, desde la UTT criticaron también la medida por su contenido simbólico: el Gobierno traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social en vez de considerarlas parte de la economía productiva. Ante estos hechos, en julio de ese mismo año realizaron un nuevo “verdurazo” ya no en la Plaza de Mayo, sino frente a La Rural con el valor simbólico que esto conlleva:

En La Rural se expresa el supuesto modelo exitoso, de gran producción y exportación que el gobierno tanto apoya pero que no produce alimentos para el pueblo argentino y está destruyendo los últimos bosques nativos, la calidad de los suelos e impulsando desalojos de familias campesinas e indígenas (denuncia de la UTT en Página/12, 19 de julio de 2018).

Sumado a este reclamo, a fines de julio de 2018 desde la UTT se manifestaron a través de un “tractorazo” al Ministerio de Agroindustria para cuestionar el desmantelamiento de distintas dependencias estatales abocadas a atender las problemáticas sectoriales como el desfinanciamiento de áreas como la Secretaría de Agricultura Familiar. Entre los reclamos presentados por las organizaciones que se movilizaron figuraba también el pedido para la reincorporación de las trabajadoras y trabajadores despedidos injustificadamente del Senasa y el Ministerio de Agroindustria (Página/12, 27 de julio de 2018).

A los ya conocidos “verdurazos” en Plaza de Mayo en septiembre se sumaron “feriazos” contra el ajuste en Plaza Constitución y Plaza Once cuyo objetivo fue visibilizar nuevamente la profunda crisis en el sector ante la devaluación del peso y denunciar el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar tras el despido de 600 técnicos.

En noviembre nuevamente tuvo lugar otro “verdurazo” en Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de semillas que obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados. Para la UTT este proyecto “les entrega el poder de las semillas a las grandes multinacionales. Esto se traduce en el cobro de regalías y la anulación del derecho al uso propio (...) es un cheque en blanco para que las multinacionales como Bayer Monsanto controlen la agricultura argentina” (Testimonio de Nahuel Levaggi en Página/12, 16 de Noviembre de 2018).

Para fines de 2018 es posible identificar cómo desde la UTT se entabla diálogo y alianzas con otros actores de la sociedad para construir vínculos y promover formas de trabajo y producción, como también contar con un mayor peso en los reclamos ante el Gobierno. Durante 2018, con los “feriazos” y “verdurazos”, la UTT ganó presencia pública y logró generar redes de solidaridad con distintos actores sean organizados como de la sociedad civil.

El año 2019 comienza con una serie de medidas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que buscó poner un freno a las ferias y “verdurazos”. La prohibición fue comunicada a los quinteros por la Dirección de Espacio Público bajo el argumento de que el gasto para limpiar las plazas cuando terminan las ferias es muy elevado. Sin embargo, a través de los feriazos la UTT logró visibilizar la problemática de los quinteros más allá de la prohibición que el gobierno de Cambiemos intentó imponerles.

El 15 de febrero de 2019 puede considerarse como uno de los días que marcaron un hito en sus reclamos y demandas. Un grupo de feriantes acompañados por representantes de la UTT y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) intentó descargar cajones de verduras en la plaza Constitución, tras lo cual personal de Espacio Público de la Ciudad se acercó a explicar que no podían hacerlo ya que no contaban con la autorización del Ejecutivo local. En ese momento, comenzaron los empujones entre feriantes e inspectores, situación que fue inmediatamente interrumpida por el personal policial, que arrojó gas pimienta y secuestró decena de cajones. Los trabajadores reaccionaron lanzando berenjenas, plantas de lechuga y tomates, y la respuesta que recibieron por parte de las fuerzas policiales fueron balas de goma. Luego de este acontecimiento, los almacenes que tiene la organización en la ciudad se vieron colmados de vecinos que se acercaron a demostrar su solidaridad.

La represión ocurrida a mediados de febrero fue abordada desde la UTT a través de una campaña gráfica: “Lechuga vs. Palos, ¿vos cual elegís?”. Con esta campaña se buscó convocar a los ciudadanos a expresar su apoyo acercándose al próximo “verdurazo” que tuvo lugar a fines de febrero. El 27F, como fue definido por la organización, tuvo lugar en más de quince provincias y fue definida como “histórica”. La protesta fue acompañada por organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas, ATE, la CTEP, la agrupación Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el movimiento de curas villeros.

En marzo de ese año, las familias de pequeños productores rurales inauguraron un mercado concentrador agroecológico en Valentín Alsina, que vende productos de forma mayorista y minorista.

Una de las principales acciones llevadas adelante por organizaciones vinculadas al sector hortícola de la Argentina tuvo lugar a seis meses de las elecciones presidenciales de octubre. Las organizaciones de pequeños y medianos productores de alimentos (quinteros, fruticultores, tamberos, campesinos, chacareros, productores de granos) convocaron a un Foro Agrario Soberano y Popular para consensuar un programa de política agraria. Entre los promotores del Foro estuvieron las federaciones rurales y uniones de productores; organizaciones como la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones y el MTE Rural, entre otros. A su vez, participaron trabajadores del Estado (INTA y la Secretaría de Agroindustria) y reunió cerca de 3 mil delegados rurales. Además, participaron representantes de Pymes, empresas recuperadas, cooperativas, vecinos de pueblos fumigados y consumidores interesados en una alimentación sin agrotóxicos.

Los temas abordados durante el Foro giraron en torno a temáticas vinculadas con el trabajo rural, semillas, rol del Estado y el rol de sus trabajadores, perspectiva de género en el campo, pueblos originarios, carnes, lechería, logística y distribución de alimentos. La realización del Foro Nacional para consensuar un programa de política agraria, cabe mencionar, debe comprenderse como parte del proceso de resistencia de estas organizaciones ante las políticas del gobierno de Cambiemos.

Asimismo, el Foro Nacional organizó un “alimentazo” en julio en Plaza de Mayo, el mismo día que las patronales agrarias comenzaron su exposición anual en La Rural. Pequeños productores y cooperativas se agruparon para vender sus productos al costo

para reclamar por los costos que afrontan los productores en el campo y los altos precios a los que los consumidores finalmente acceden a los alimentos en las ciudades. A diferencia de otros “verdurazos” en la que la mercadería se regalaba, en esta ocasión fue vendida al costo de producción con la intención de demostrar que se puede vender más barato. Esta misma acción se llevó adelante en plazas de las provincias de Misiones, Córdoba y Santiago del Estero.

Finalmente, a principios de octubre de 2019, la UTT junto a quinteros, cooperativas agropecuarias y redes de almacenes de los movimientos sociales hicieron un “alimentazo” en Plaza de Mayo con el objetivo de mostrar su capacidad de producir y comercializar a precios populares. La feria tuvo como consigna “Por un modelo que produzca alimentos accesibles y sanos”.

4. Reflexiones finales

El repertorio de acción desarrollado por la UTT en el período 2016-2019, tal como hemos visto hasta aquí, refleja la afirmación, en el proceso de la acción colectiva, de un actor social que vuelve a definirse a partir de la selección estratégica de los cursos de acción y la movilización de los recursos disponibles con una finalidad concreta. En ese proceso de redefinición reflexiva del actor social, un elemento clave será “su relación con las instituciones políticas: o se inscribe dentro de ellas o se enfrenta a ellas.” (Revilla Blanco, 2005: 33).

La relación de enfrentamiento de la UTT con el gobierno vigente durante el período en estudio, evidenció el conflicto político latente: las reivindicaciones colectivas desarrolladas por la UTT en la escena pública, pugnaban por afectar intereses -puesto que se inscribían en el marco de la puja distributiva- tanto de actores privados, como de los sectores de gobierno (Tilly, 1998).

En tal sentido, el propósito de este trabajo es dejar asentadas las bases para profundizar en el análisis de la construcción identitaria de la organización, las dinámicas colectivas y la interacción comunitaria, así como la relación de la misma con el Estado en distintos escenarios políticos. Se espera que tal abordaje se realice desde un enfoque interdisciplinario que ponga en juego categorías de las ciencias sociales como del campo de la psicología, poniendo de relieve aquellos aspectos que caracterizan a la subjetividad de las organizaciones y las lógicas colectivas de acción, entendiendo por éstas las modalidades o formas distinguibles en el hacer por las cuales un colectivo acciona o actúa en una situación o momento determinados. (Fernández, 2012).

5. Bibliografía

Álvarez, S., Dagnino, E. y Escobar, A., 2001. “Introducción: Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos”, en Álvarez, S., Dagnino, E. y Escobar, A (ed.), *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (pp. 17-48). Bogotá: Taurus – ICANH,

Aparicio, S. y Benencia, R., 1999. Empleo rural en la Argentina. Viejos y nuevos actores sociales en el mercado de trabajo, en Aparicio, A. y Benencia, R. (Coords.), *Empleo Rural en tiempos de flexibilidad* (pp. 29-81). Buenos Aires: La Colmena - FLACSO.

Attademo, S.; Waisman, M.; Rispoli, M.; Lucero, P., (noviembre, 2013). Persistencias y reestructuraciones en la producción familiar. VII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9420/ev.9420.pdf

Bártola, D., 2018. Más allá de la supervivencia: *La participación de pequeños productores del Cordón Hortícola del Gran La Plata en asociaciones y cooperativas como estrategias para la reproducción social en el período 2010-2017*. Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1485/te.1485.pdf>

Benencia, R., 2012. “Participación de los inmigrantes bolivianos en espacios específicos de la producción hortícola en la Argentina” en *Work and Agricultural Global Chains. Política y sociedad*, vol 49, N° 1, pp 163.

Berger, M. y Cowan Ros, C. (julio, 2016). “Sujetos” a la Organización. Prácticas y formatos como objeto de disputa en el campo del desarrollo rural. XIII Jornadas Nacionales y V Internacionales de Investigación y Debate, Quilmes, Argentina.

Ferraris, G.; Bravo, M., 2014. Organizaciones de productores hortícolas del Cinturón Verde de La Plata. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada, Argentina. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4751/ev.4751.pdf

Fernández, A. M., 2012: “Lógicas colectivas, Psicoanálisis Y Biopolíticas”, Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Montevideo.

Gabrinetti, M. A., Burone, E., y Schiavi, M. D., 2016. Trabajo agrario en el gran La Plata: condiciones de vida, trabajo y nuevos desafíos desde las políticas públicas en el contexto actual. III Foro Latinoamericano de Trabajo Social, La Plata, Argentina.

Giarracca, N., Gras C. y Barbeta, P., 2005. De colonos a sojeros. En N. Giarracca y M. Teubal (Coords.), *El campo argentino en la encrucijada. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad* (pp. 101-130). Buenos Aires: Alianza Editorial

Kessler, G., 2011. “Exclusión social y desigualdad ¿Nociones útiles para pensar la estructura social argentina?”, en *Laboratorio. Revista de estudios sobre cambio social*, vol 12, N° 28.

Masseti, A., 2010. “La protesta social en la Argentina del bicentenario”, en Massetti, A., Villanueva, E y Gomez, M. (Comp.), *Movilizaciones, protestas e*

identidades políticas en la argentina del bicentenario (pp. 11-24), Buenos Aires: Nueva Trilce.

Melucci, A. 1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta*, N° 69, Madrid.

Murmis, M., 1998. El agro argentino: algunos problemas para su análisis, en N. Giarracca y S. Cloquell (Comps.), *Agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales* (pp. 205-243). Buenos Aires: La Colmena-FLACSO.

Revilla Blanco, M, 2005. “Ciudadanía y acción colectiva en América Latina. Tendencias recientes”, en *Estudios Políticos*, No. 27, pp. 27-41, Medellín. Disponible en: <file:///C:/Users/laura/Downloads/1348-17530-1-PB.pdf>

Seibane, C. y Ferraris, G., 2017. “Procesos organizativos y políticas públicas destinadas a productores familiares del sur del Área Metropolitana (provincia de Buenos Aires, Argentina), 2002-2015”, en *Mundo Agrario*, vol 18, N° 38, La Plata, Argentina. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/15155994e060>

Tarrow, S., 1997. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Universidad.

Tilly, C., 1990. “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”, en *Zona abierta*, N° 54, pp. 167-195, España.

Tilly, C., 1998. “Conflicto político y cambio social”, en Ibarra, P. y Tejerina, B. (Ed.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 25-41). Madrid: Trotta.

Zibechi, R., 2003. “Los movimientos sociales latinoamericanos: desafíos y tendencias”, en *Revista del OSAL*, N° 9, Buenos Aires.

Artículos periodísticos

Dellatorre, R., 2018. ”Verdurazo y estado ausente”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 8/4/2018. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/108926-verdurazo-y-estado-ausente>

“Desamparo a los pequeños productores”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 14/7/2018. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/128294-desamparo-a-los-peuenos-productores>

Hayon, A., 2017. “Tarjeta roja para los quinteros bolivianos”, en diario *Página 12*, Buenos Aires, 14/9/2017. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/62694-tarjeta-roja-para-los-quinteros-bolivianos>

Hayon, A., 2017. “Un verdurazo para ayudar a los jubilados”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 27/11/2017. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/85343-un-verdurazo-para-ayudar-a-los-jubilados>

“Más quejas por la designación de Echevere”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 6/11/2017. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/74169-mas-quejas-por-la-designacion-de-etcchehere>

“Tractorazo en Agroindustria”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 27/7/2018. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/131078-tractorazo-en-agroindustria>

”Verdurazo en la Plaza de Mayo”, en diario *Página/12*, Buenos Aires, 16/11/2018. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/155757-verdurazo-en-la-plaza-de-mayo>

“Verdurazo en la puerta de la Rural” en diario *Página/12*, Buenos Aires, 19/7/2018. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/129143-verdurazo-en-la-rural>

Sitios Web

Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) (12 de enero de 2020). Producimos alimentos para el pueblo. Recuperado de: <https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/>